

Ausencia de derechos humanos en megaproyectos económicos

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

5 de octubre de 2007

En el marco de la visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada, Miloon Kothari y del Relator de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen en septiembre pasado, el colectivo Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC) realizó un seminario en el que se debatió sobre las consecuencias que trae la construcción de presas en nuestro país.

“Los estudios y el proyecto del gobierno comienzan en 1996 y la gente empezó a organizarse. No fue posible obtener dinero para su propio desarrollo. El gobierno quiso confundir a la gente sobre el proyecto y lo que puede producir la tierra. Una decisión de un proyecto alternativo fue tomada en Agua Caliente el doce de agosto. Quieren que la ONU promueva la iniciativa del gobierno para aceptar su decisión”.

Representante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP)

“El gobierno siguió diciendo que habrán beneficios para la gente, pero fueron mentiras. Por fin, la gente firmó por el gobierno, pero solamente con presión. Costó mucho defender los derechos. Luchando contra el poder es muy difícil y hay mucha tristeza”. **Lupita Lara, afectada por la presa de Arcediano (Jalisco)**

Durante todas las presentaciones y testimonios del día, se enfatizó que la construcción de las grandes presas no trae beneficios a las comunidades cercanas. Generalmente, este tipo de megaproyectos traen solamente efectos negativos. Este hecho fue confirmado por Miloon Kuthari de Naciones Unidas, quien comentó que no hay casi ningún caso en el mundo donde tales proyectos rindieron beneficios al nivel local.

El Plan Puebla Panamá

El seminario se enfocó sobre el caso del proyecto hidroeléctrico de La Parota, pero este es solo un ejemplo de muchos que hay por todo el país. La construcción de presas es parte del Plan Puebla Panamá, una iniciativa agresiva actual para “crear corredores industriales y megaproyectos turísticos para las maquiladoras que también requieren de la apropiación y garantía del abasto de agua y energía a bajo costo. La infraestructura carretera, aérea, portuaria y ferrocarrilera para implementar el ‘libre comercio’ requiere de mucha energía y la energía del agua, del aire, del carbón, del gas o de las oleaginosas”. (El Agua y los Rios Amenazados en México, Gustavo Castro Soto, Mapder, Marzo de 2007)

La Dra. Patricia Ávila del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que aunque la presa La Parota fue propuesta como forma para producir energía hidroeléctrica para Acapulco, Guerrero ahora es claro que hay otros objetivos con inversiones privadas:

1. Zona de turismo (marinas, hoteles de lujo, clubes de golf)

2. Zona residencial (para la gente del Distrito Federal que pasa los fines de semana en el puerto dada su cercanía)
3. Carreteras
4. Puentes y cabañas
5. Servicios (hospitales y escuelas para la población)

Todos estos proyectos van a requerir más y más agua. Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no consideró el acceso al agua de la población local. Asimismo, solo los ejidatarios que comprobaron la pertenencia legal de la tierra pudieron participar en las discusiones sobre la hidroeléctrica, es decir la minoría, excluyendo especialmente a las mujeres y los jóvenes.

Los planes son muy atractivos a los inversionistas y son promovidos como el “Desarrollo Nacional” que quiere decir algo muy positivo. La palabra “desarrollo” es utilizada para sugerir que todos y todas serán beneficiados y que la pobreza disminuirá. Sin embargo, los inversionistas y empresarios serán los únicos que tendrán ganancias mientras que la gente local perderá con el proyecto; sus tierras, sus casas, sus sustentos, etc. Al igual mucho del dinero es invertido tanto por la iniciativa privada como por los gobiernos local y federal, lo que se traduce además en mayor deuda pública.

Ninguna señal de buena fe: SERAPAZ

Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, comentó que Servicios de Asesoría para la Paz (SERAPAZ) trabajó con los afectados de La Parota durante un año y medio, pero en ese lapso, no hubo apertura para discutir con el gobierno estatal o federal y ninguna señal de buena fe de su parte.

Afirmó que la gente indígena y campesina de la región tiene el derecho a ser escuchado y el derecho a su propio desarrollo con la presa o sin la presa. Si no habrá un conflicto creciente entre comunidades, familias y los promotores de dicho proyecto.

El relator de Naciones Unidas Miloon Kothari reconoció también que el gobierno de México esta cerrando los espacios para las voces de la sociedad civil.

¿Como asegurar fidelidad a acuerdos internacionales?: (ONU)

Al mismo tiempo, Kothari recordó que México ha firmado varios acuerdos e instrumentos de cuidado y vigilancia de las garantías individuales y que un plan sobre derechos humanos esta vigente. Añadió que “no hay razón por la que un país firmante de los acuerdos de la ONU no tome en cuenta los derechos humanos en el desarrollo de megaproyectos. Claramente, un reto es como asegurar fidelidad a tales acuerdos de parte de los firmantes”.

Los afectados en otras comunidades recuerdan experiencias malas – por ejemplo, unas comunidades fueron desplazadas en los años sesenta cuando se construyó la presa La Venta en Guerrero, quienes recibieron indemnización unos cuarenta años después. (Amnistía Internacional, 4 de agosto de 2007)

Alternativas

Rodolfo Stavenhagen comentó que hay alternativas a los megaproyectos. Existen ejemplos de presas más pequeñas, administrados por la comunidad – como en el caso de Filipinas – con los mismos resultados pero sin ocasionar desplazamiento de pobladores.

Maria González del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC), señaló sobre el proyecto de la presa Arcediano en Jalisco que “había cinco propuestas presentadas al gobierno y se eligió la opción más insostenible: la presa. La gente fue desplazada, amenazada, las casas destruidas. Además, el río es uno de lo más contaminados en el país”.

“La presa, socialmente inútil”

La presentación de Mario Govea Sansón, Coordinador de Electricidad del Instituto de Estudios de la Energía para América Latina y el Caribe, mostró con tablas y gráficos que en efecto la presa de La Parota no es necesaria de estar al día con la demanda de electricidad. Fijó claramente que los grandes hoteles usan la mayoría de la electricidad y sentenció: “la presa no es necesaria y es socialmente inútil.”

“El megaproyecto no va a producir el desarrollo que dice el gobierno. Es el contrario para los afectados. Además, no es la única manera para generar electricidad, violando los derechos humanos y ambiénteles”.

“Los campesinos no van a recibir ningún beneficio y por eso se oponen al proyecto. Quieren un desarrollo sostenible en su comunidad, pero la presa es lo contrario”, sentenció Martín García, representante de los afectados por la presa El Cajon en Nayarit.

Con información de Anne-Marie Jackson